



GD-F-008 V.9

Página 1 de 5

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010042815 DEL 30/03/2017

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el párrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de MUTATÁ del Departamento de ANTIOQUIA, es de categoría 6 y al no haber sido prestador directo de los servicios público de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010053285 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al Municipio de MUTATÁ del Departamento de ANTIOQUIA, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

- *“Reporte en el SUI el decreto mediante el cual se adopta la estratificación urbana”*

La referida resolución se notificó por aviso al Municipio de MUTATÁ, el día 23 de noviembre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el Municipio de MUTATÁ del Departamento de ANTIOQUIA, no interpuso recurso de



reposición contra la resolución de descertificación, en razón a lo cual, el referido acto administrativo quedó en firme el 26 de septiembre de la misma anualidad.

Que el día 15 de febrero de 2017, el Municipio de MUTATÁ del Departamento de ANTIOQUIA, a través del radicado 20175290086952, solicitó la revocatoria directa de la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SOLICITUD DE REVOCATORIA

2.1 De los argumentos del ente territorial

Como argumentos de la solicitud de revocatoria, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial:

2.1.1 Manifestó que no se llevó a cabo proceso de empalme con la administración saliente, por renuncia del alcalde anterior pero que a pesar de ello procedió a hacer el cargue oportuno de información, habiéndosele descertificado toda vez que el Decreto de adopción reportado, no estaba firmado por el Acalde del municipio, por lo que tan pronto se enteró de su descertificación, procedió a buscar el documento el cual aporta con su solicitud de revocatoria.

2.1.2 Afirmó que al tratarse de un error de forma y no de fondo tiene unas consecuencias contrarias al interés público y social y causa un agravio a la administración

2.1.3 Adujo que con la decisión de descertificación el municipio se verá privado de unos recursos que por mandato Constitucional y legal, corresponden destinarlos a líneas de inversión determinadas en la Ley 715 de 2001 y que se afectaría a un amplio sector de la población, en lo relativo a la prestación de los servicios públicos.

2.2 De los documentos aportados con la solicitud de revocatoria.

Con el radicado con el No. 20175290086952, por medio del cual se sustentó la solicitud de revocatoria directa, el municipio aportó el siguiente documento:

- Decreto No. 032 de 2002, por medio del cual se adopta la estratificación.

El anterior documento, en su valor legal, se incorpora al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica una decisión administrativa contraria a la Constitución Nacional o a la ley, al interés público o social, o atenten contra él; o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el artículo 93° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que dispone:

“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. *Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.*
2. *Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.*
3. *Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.*

Ahora bien teniendo en cuenta que el municipio manifiesta que con la decisión cuya revocatoria solicita se pudo configurar un agravio injustificado a una persona, este Despacho procederá a

analizar los argumentos establecidos por él, con el fin de establecer si existe procedencia o no respecto a la revocatoria solicitada.

- **Del haber sido descertificado por un error de forma el cual es corregido con ocasión a la solicitud de revocatoria y de las consecuencias de la descertificación**

Manifestó que no se llevó a cabo proceso de empalme con la administración saliente, por renuncia del alcalde anterior pero que a pesar de ello procedió a hacer el cargue oportuno de información, habiéndosele descertificado toda vez que el Decreto de adopción reportado, no estaba firmado por el Alcalde del municipio, por lo que tan pronto se enteró de su descertificación, procedió a buscar el documento el cual aporta con su solicitud de revocatoria.

Afirmó que al tratarse de un error de forma y no de fondo tiene unas consecuencias contrarias al interés público y social y causa un agravio a la administración.

Adujo que con la decisión de descertificación el municipio se verá privado de unos recursos que por mandato Constitucional y legal, corresponden destinarlos a líneas de inversión determinadas en la Ley 715 de 2001 y que se afectaría a un amplio sector de la población, en lo relativo a la prestación de los servicios públicos.

Con relación al argumento en estudio, este Despacho se permite señalar lo siguiente:

El requisito cuyo incumplimiento es objeto de debate consiste en el reporte en el SUI el decreto mediante el cual se adopta la estratificación urbana. Al revisar el documento cargado el 18 de abril de 2016, se encuentra el Decreto No. 032 de 2002, por medio del cual se adopta la estratificación. No obstante, dicho documento no está firmado por el Alcalde, por tal razón, el ente territorial fue descertificado.

En este orden de ideas, es claro que el documento cargado al Sistema Único de Información de Servicios Públicos - SUI, está incompleto, razón suficiente para descertificar al ente territorial por el incumplimiento a uno de sus requisitos y que conlleva a tener certeza que la resolución de descertificación fue proferida conforme a la Constitución y la Ley.

Lo anterior, sin perjuicio a los argumentos del municipio quien sostiene que no tuvo proceso de empalme, toda vez que es de recordar que el proceso de certificación es de carácter institucional y por tanto es el ente territorial como tal, quien debe acreditar su cumplimiento a los requisitos y recibe las consecuencias de una certificación o descertificación, con independencia del funcionario que desempeñara el cargo de Alcalde Municipal en el mismo y de las responsabilidades que se den al interior del ente territorial.

En consecuencia, una vez transcurrido el término para verificar que el ente territorial hubiera dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 2.3.45.1.2.1.6 del decreto 1077 de 2015, este Despacho constató que el municipio no dio cumplimiento cabal a uno de los mismos, lo que conllevaba por expresa disposición normativa a que el municipio fuera descertificado, sin que pueda el ente territorial excusarse en la ignorancia de la norma, toda vez que es claro que el Artículo 9º del Código Civil, establece que "*La ignorancia de las leyes no sirve de excusa*" así como del artículo 56 de la Ley 4 de 1913 (Código de Régimen Político) que en idéntico sentido *ad literam* establece que "(...) *No podrá alegarse ignorancia de la ley para excusarse de cumplirla (...)*".

Ahora bien, llama la atención del Despacho, que pese a que el municipio fue notificado debidamente de la decisión de descertificación, se abstuvo de interponer recurso de reposición y sólo procede a corregir el documento reportado solo con ocasión a su solicitud de revocatoria.

En efecto, con ánimo garantista, este Despacho procedió a verificar el acto administrativo aportado por el ente territorial con ocasión a la solicitud de revocatoria, advirtiendo que el mismo, contiene la hoja con la firma del Alcalde Municipal tal y como se observa a continuación:

ARTÍCULO OCTAVO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y hasta el año 2004, salvo disposiciones del gobierno nacional.

Publíquese y Cúmplase

Dado en Muratí, el 25 de febrero de 2002

CESAR AUGUSTO MAYO GARCÍA
Alcalde Municipal

El presente Decreto se publicó en las carteleras de la alcaldía municipal por diez (10) días hábiles.

SAMUEL MUÑOZ QUIROZ
Secretario de Gobierno

No obstante, se advierte que dicho documento no permite controvertir la decisión adoptada por el Despacho, toda vez que la revocatoria directa no es una instancia que permita al ente territorial revivir términos procesales, los cuales, conforme al artículo 13° de la Ley 1564 de 2012 son de orden público:

"Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley".

La Corte Constitucional se ha pronunciado así al respecto¹ en los siguientes términos:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos particulares y funcionarios llamados a aplicarlas.", además advierte que "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." (...) En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso".

En este entendido es claro que al no haberse reportado inicialmente el documento de manera íntegra dentro del plazo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.9 del Decreto 1077 de 2015, esta instancia no es la procedente para verificar la posibilidad o no de subsanación del incumplimiento presentado, toda vez que la figura de la revocatoria establece unas causales taxativas y específicas de procedencia que no se acreditan en el caso concreto y máxime cuando esta evidenciado el incumplimiento al requisito en cuestión y la resolución de descertificación fue proferida conforme a derecho.

Sobre el particular, se debe señalar que tal y como previamente fue expuesto la resolución de descertificación fue proferida conforme a la Constitución y la Ley; así mismo, con ésta no se causó agravio injustificado al ente territorial ni un perjuicio al interés públicos o social, toda vez que está en el resorte del municipio cumplir con las normas que le atañen en cada uno de los procesos y asumir las consecuencias establecidas en las normas en caso de incumplimiento, sin perjuicio de lo cual es claro que en dicho caso el Departamento es quien debe administrar los recursos del SGP APSB y para ello **está obligado a hacerlo conforme lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007.**

En este orden de ideas el municipio no será privado de los recursos que le corresponden, únicamente no será quien los administre ya que ello corresponderá al Departamento de

¹ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería.

Antioquia.

De lo anterior es claro que, si el municipio no quiere ser sujeto a una descertificación, tiene que cumplir las normas que le son aplicables, en los tiempos establecidos por estas para tal fin y en un supuesto de descertificación debe asumir las consecuencias de la misma **sin afectar la prestación de servicios públicos a sus usuarios.**

En este orden de ideas, al no configurarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, no se revocará el acto administrativo cuya revocatoria es solicitada por el municipio.

En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- NO REVOCAR la Resolución No. SSPD 20164010053285 de 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de MUTATÁ del Departamento de ANTIOQUIA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de Antioquia, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Dada en Bogotá, D. C.



CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS

Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Alejandro Neira Sánchez – Abogado Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Revisó: Katherine Arenas – Abogada contratista – Grupo de Certificaciones e Información 

Expediente: 2016401351601030E